

ELECCIONES ECUADOR 2021: ENTRE LA DESPOLARIZACIÓN LENTA Y EL RETORNO DE LA GRAN BATALLA

Franklin Ramírez Gallegos

8 de abril de 2021

El balotaje presidencial del 11 de abril 2021 llega en medio de una de las más profundas crisis de la República desde el retorno democrático. El programa de ajuste estructural aplicado por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), luego de su ruptura con Rafael Correa, ha estabilizado desde 2018 la parálisis económica y la contracción de las políticas redistributivas. La agenda de reducción del Estado y austeridad fiscal no dio tregua ni si quiera en el momento de mayor expansión de la COVID-19. Entre el desfinanciamiento de la salud pública y la desidia gubernativa para implementar alguna estrategia consistente de gestión de la pandemia, el Ecuador registra una de las cifras de muertes por exceso más elevadas de la región y del globo. La confluencia entre recorte estatal, recesión económica y colapso sanitario han disparado las líneas de empobrecimiento y desigualdad a niveles sin precedentes en la última década. Aun así, en el marco de una enorme acumulación de poder, la derecha política y las élites económicas no han cesado en su empeño de llevar lo más lejos

posible las reformas promercado acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una derecha radicalizada aprovechó incluso el confinamiento y el estado de excepción casi permanente, impuestos por el virus, para reforzar el ajuste. En su cruel pedagogía, el coronavirus contribuyó a la desmovilización popular, justo en un momento que parecía despegar luego de la robusta contestación social de Octubre 2019 contra el retiro del subsidio a los combustibles. La protesta, en todo caso, relanzó al movimiento indígena al centro de la contienda democrática y pareció poner en crisis la frontera política, correísmo vs. anticorreísmo, dominante de la última década. Los resultados de la primera vuelta presidencial que tuvo lugar el 7 de febrero de 2021 recogieron de algún modo esa emergente despolarización: el candidato del movimiento indígena, Yaku Pérez de Pachakutik, fue desplazado del balotaje por una mínima diferencia (32.000 votos equivalentes al 0,35% del total, respecto a la segunda opción más votada). Así, su caudal electoral parece decisivo para el balotaje que vuelve a poner cara a

cara al candidato del campo neoliberal, Guillermo Lasso, de Creando Oportunidades (CREO) y Andrés Arauz, representante de la Revolución Ciudadana (RC-UNES). En medio de una enorme desconfianza con el órgano electoral, la batalla política que libran ambas fuerzas no anticipa escenarios de fácil procesamiento.

El viraje de Moreno

Michel Temer accedió a la presidencia de Brasil en el marco de su colaboración con el golpe institucional contra Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT). Temer gobernó el país durante dos años (2016-2018) con una amplia coalición del centro a la derecha —y de muchos partidos gelatinosos— que se amalgamó en torno a un explícito anti-PTismo inflamado por la dudosa operación anticorrupción Lava Jato y la voluntad de redireccionar la economía en clave promercado. En las elecciones presidenciales de 2018, y en medio de una profunda crisis político-económica, los partidos aliados a Temer —en particular, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Fernando Henrique Cardoso, y su propia tienda política, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB)— recibieron una contundente derrota. Así, tras su paso por el poder, Temer había contribuido al hundimiento tanto de quienes lo llevaron al poder como de quienes lo sostuvieron en su cruzada antipopular.

De cara al balotaje ecuatoriano, Moreno vive similar decrepitud que su ex par brasileño. Compañeros del pasado y aliados del presente se acusan mutuamente de haber germinado lo que en las redes sociales se conoce como *#ElPeorGobiernoDeLaHistoria*. La sinuosa trayectoria de Moreno en los últimos años explica, en parte, el entreverado proceso electoral que vive el Ecuador. Proclamado como candidato de Alianza País (AP) —movimiento político fundado en 2006 por Correa—, Moreno se impulsó (2017) en segunda vuelta a Guillermo Lasso (CREO), con la oferta de pacificar la política luego de una década de beligerancia enmarcada por el estilo polarizador de su antecesor. “Continuidad, no continuismo” (*sic*), repitió en campaña mientras insistía en convocar a un “gran diálogo nacional” para forjar un “gobierno de todos”. Una vez en el poder, la anodina promesa postpopulista de Moreno devino en una sofisticada maquinaria para borrar del mapa todo rastro de la Revolución Ciudadana y reconducir el modelo de desarrollo.

Susan Stokes (2001) habló de “neoliberalismo por sorpresa” para designar a un conjunto de gobernantes que, luego de haber sido elegidos con programas antiajuste, terminaron por implantar políticas atadas al Consenso de Washington. Stokes explora cómo tales gobiernos han reparado sus problemas de legitimidad democrática luego de ejecutar giros de

timón contrarios a la voluntad popular. Si en el Perú de los años noventa Fujimori superó ese impasse —al punto de ser reelegido— trocando seguridad y orden (derrota de Sendero Luminoso) por ajuste estructural, en el Ecuador de Moreno el bloque de poder presentó el viraje neoliberal como consecuencia necesaria de la “crisis moral del correísmo”. Así, en la estela del Lava Jato, el combate contra la corrupción fue colocado como principal vector de legitimación del retorno inconsulto de los mercados.

La reconducción política de Moreno requería, en todo caso, algún tipo de refrendación popular en medio de la ruptura del presidente con la amplia bancada legislativa de AP¹. Dicho bloque había implosionado —la disidencia correísta vs. los leales a Moreno—, restando gobernabilidad a la nueva agenda gubernativa. La mayoría oficialista se reconstituyó, desde entonces, con los votos de las fuerzas opositoras a Correa en la década previa: el arco de las derechas, con CREO a la cabeza, y Pachakutik (PK), brazo electoral del movimiento indígena. El extenso anticorreísmo ya había operado de modo convergente cuando sostuvo a Lasso en el balotaje de 2017. Dicha unidad electoral mutó en coalición gubernativa con la conversión de Moreno y su ensañamiento con la RC. La Consul-

¹ En las elecciones parlamentarias de 2017, AP se ratificó como primera fuerza y obtuvo la mayoría de curules en disputa.

ta Popular de febrero 2018, convocada por el presidente bajo el barniz anticorrupción, tenía el propósito de eliminar la opción reeleccionaria de la Carta Magna², deshacer medidas emblemáticas de la administración precedente (como, por ejemplo, el impuesto a la plusvalía) y “des-correizar el Estado”. Aunque la Consulta tuvo varios vicios de procedimiento³, el pueblo autorizó largamente (Wolff, 2018) a proceder con una serie de reformas institucionales que pusieran fin al dominio que Correa parecía aún detentar en diversas instituciones. La derecha criolla blindó, desde entonces, la captura del poder político que Moreno ya había concedido⁴.

En efecto, desde inicios de su mandato, el gobierno convocó un diálogo nacional en cuyo transcurso dominaron las demandas de élites y grandes grupos económicos. Para Moreno todo acontecía como si su súbita fragilidad política, por el distanciamiento con Correa, solo podía ser reparada a través del respaldo de aquellos. Multiplicó entonces sus reuniones con propietarios de grandes medios, banqueros, exportadores y referentes de la derecha. En los márgenes de la escena, se fotografió también con dirigencias de organizaciones popu-

² La Constitución fue reformada en 2015 para permitir la reelección ilimitada de todos los cargos de elección popular desde 2021.

³ Ver informe de la OEA (2018)

⁴ Lasso reivindicó siempre la propiedad intelectual de la Consulta (*El Universo*, 2020).

lares. Al tiempo, la activación de la maquinaria mediático-judicial para destruir el prestigio del ciclo correísta y multiplicar la apertura de expedientes contra el expresidente y figuras de su entorno, sintonizaba con la aspiración de las élites a poner fin al “ogro populista”. Como operación política, la anticorrupción conseguía engarzar ambos elementos. La destitución y apresamiento de Jorge Glas —vicepresidente electo y muy próximo a Correa— fue un invaluable trofeo para la empresa morenista de ganar la confianza de los poderosos. El pleno dominio sobre las instituciones de control y de justicia era condición de mayor eficacia en tal propósito. La Consulta Popular de 2018 contribuyó también a esa tarea: destituir a las autoridades estatales que habían sido electas a instancias de la eventual influencia del expresidente. Los funcionarios cesados fueron reemplazados por figuras insignes del anticorreísmo. Se resolvía así la distribución de poder en el nuevo bloque gobernante.

A un año de su posesión, en suma, Moreno había recompuesto su campo de alianzas y reorientado los antagonismos fundamentales. Luego de ser la fuerza hegemónica hasta 2017, la RC pasó a ser oposición política y, progresivamente, a operar en pura lógica de resistencia: al acoso judicial a su dirigencia se sumó la expropiación de AP —el instrumento electoral de mayor anclaje popular desde el retorno democrático— en una ma-

niobra del Consejo Nacional Electoral (CNE) leal a Moreno. Al tiempo, la agenda antidesarrollista de la derecha se enseñoreaba en Carondelet. El nombramiento del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, como ministro de Economía en mayo de 2018 selló el pacto de dominación que soporta a Moreno.

Derechas radicales y padecimiento social

Tomado el poder institucional, restaba a las élites formatear la agenda pública a instancias de sus más caros intereses. La aprobación de la Ley de Fomento Productivo en agosto de 2018 fue la primera medida de Martínez. La normativa es el instrumento más agresivo planteado en Ecuador en la perspectiva de sostener al gran empresariado y reencuadrar una sociedad de mercado: sancionó la austeridad, golpeó derechos laborales, facilitó una enorme apropiación de rentas a grupos económicos (perdonó el 55% de sus deudas a los 50 mayores deudores tributarios) y desmontó los instrumentos maestros del Estado desarrollista-distributivo⁵. La firma del acuerdo con el FMI, a inicios de 2019, vigorizó la política ortodoxa. El acuerdo, no obstante, solo fue discutido con el empresariado. La Asamblea Nacional no fue consultada. La Corte Constitucional tampoco dio su aval. Todos los filtros del de-

⁵ Para un análisis detallado de la Ley, ver Observatorio de la Dolarización (2018).

bate democrático fueron cortocircuitados. Sin acceso a las instituciones crece la ocasión para la política contenciosa. Así fue.

La firma del Decreto 883, acordado con el FMI, para eliminar el subsidio a los combustibles, puso fin a cualquier rasgo consensual del giro neoliberal. Organizaciones populares, que respaldaban al gobierno, ganaron la calle. La RC, que operaba como solitaria oposición, se vio desbordada. El retorno de la movilización indígena fue particularmente llamativo. Algunas de sus organizaciones y dirigentes colaboraron con Moreno. Aun así, el régimen no intentó acercamiento alguno. La declaratoria de estado de excepción, apenas inició la protesta, prefiguró el colosal despliegue de violencia por venir. La más grande revuelta popular del siglo XXI, Octubre 2019, fue repelida con toda la fuerza en nombre de un supuesto intento golpista. El gobierno desconoció siempre la legitimidad de la resistencia, judicializó a líderes indígenas y encarceló a dirigentes correístas por delitos de sedición nunca probados. Los presos políticos completaron el cruento balance de la movilización: 11 fallecidos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos, 80% de ellos de forma ilegal, falsos positivos, etc. Un reciente informe de la Comisión de la Verdad, activada desde la Defensoría del Pueblo (2021), habla incluso de ejecuciones extrajudiciales. Aun así, la derecha cerró filas con Moreno y exigió todo

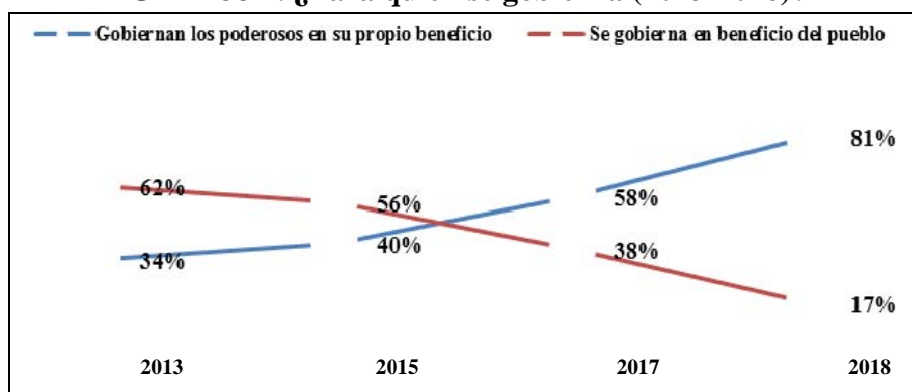
el rigor para preservar el orden. El exalcalde guayaquileño e histórico líder de las élites, Jaime Nebot, llegó a hablar de “ejércitos patrióticos” para resguardar la ciudad del asedio indígena (Díaz y Mejía, 2020). En campaña, la coalición oficialista y la Policía Nacional rechazaron el informe de la Comisión. Lasso no asistió al acto en que la Defensoría entregaba su reporte a la sociedad.

La fase puramente violenta del ajuste apenas arrancaba. Con la expansión de la COVID-19 se confirmó la poca disposición gubernativa a priorizar la salud pública sobre las metas de austeridad. La inercia fiscalista profundizó el desastre sanitario: el país registra una de las cifras más elevadas de muertes en exceso a nivel regional (Ramírez Gallegos *et al.*, 2020). No solo eso. La pandemia fue percibida por el bloque de poder como ocasión para relanzar las reformas atascadas. Así, se liberalizaron los precios de los combustibles —aquello que la protesta de Octubre había bloqueado— y se aprobó la llamada “Ley Humanitaria” en junio de 2020, que redobla el poder de los empleadores y profundiza la precarización laboral bajo el discurso de “cuidar el empleo” (Varela, 2020). En medio del pico de COVID-19 prosiguieron, además, los pagos de deuda externa, recortes presupuestarios, reducción de burocracia —incluso en Salud— y disminución salarial.

Los escándalos de corrupción, como por ejemplo el reparto de hospitales a cambio de apoyo parlamentario, se multiplicaron. La indignación pública se expandió no obstante cuando, a inicios de 2021, se supo que las escasísimas vacunas que el gobierno adquirió en el primer lote (8.000 dosis), habían sido repartidas entre funcionarios y familiares, propietarios de los medios cercanos al gobierno,

círculos de la clase dominante (Club Rotario) y otras figuras del empresariado y las élites criollas. Los sectores de vacunación prioritaria (agentes del sistema de salud, adultos mayores) han debido esperar su turno. El escándalo #VacunadosVIP provocó la renuncia de dos ministros de Salud —uno fugado a Miami—, con lo que el país contabiliza ya cuatro durante la pandemia.

GRÁFICO 1. ¿Para quién se gobierna (2013-2018)?



Fuente: Elaboración del autor a partir del Latinobarómetro

Otros altos funcionarios también han dimitido recientemente⁶ en medio de la pulverización de la confianza en Moreno. La desidia gubernativa para encarar la crisis sanitaria —déficit de tests, de rastreo, de insumos hospitalarios, de cifras transparentes, etc.— profundizaría la percepción de que se gobierna para pocos (gráfico 1). El incremento de los niveles de pobreza y desigualdad⁷ en medio del

deterioro de la economía —advertido antes de la pandemia⁸— completan el cuadro de devastación de los derechos de las mayorías.

Así, Moreno cierra su mandato con mínima aprobación. Sin sorpresas, con el arranque de la primera vuelta que tuvo lugar en febrero, comenzó

⁶ Sobre los múltiples cambios en el gabinete ver *El Comercio* (2021)

⁷ En diciembre 2016, la pobreza por ingresos se ubicaba en 22,9%. Para diciembre de 2019, llegó a 25%. Para fines de 2020, año pandémico, alcanzó 32,4%. En similares años, la pobreza extrema escaló de 8,7%, a

8,9 y cerró con 14,9%. Por su lado, la desigualdad (Gini) escaló de 0,46 (dic. 2016) a 0,50 (dic. 2020). Las cifras oficiales (INEC, 2020) han sido criticadas por cambios metodológicos injustificados.

⁸ El último trimestre de 2017 cerró con un PIB de 2,8%. Para 2019, en medio del ajuste, la economía decreció -1,4%. Para el tercer trimestre de 2020, dicho decrecimiento llega a -8,8% (Banco Central, 2021).

el operativo de puesta a distancia del presidente: las élites reniegan de su alfil, insignes funcionarios lo abandonan y la candidatura estrella de la derecha radicalizada, Lasso, *simula no haber* tomado parte de la coalición gobernante. Las banderas anticorreístas se inflaman como si entre 2017 y 2021 nada hubiera pasado. Nicolás Maduro vuelve a entrar a escena. El guion antibolivariano se presume inmune al tiempo y a los reales problemas de la ciudadanía.

Despolarización sin prisa

Entre el feroz sofocamiento del levantamiento de Octubre 2019 (Comisión de la Verdad, 2021) y la aceleración de las políticas de austeridad en plena pandemia, el bloque de poder mostró cuán inclinado está a administrar de modo violento la nueva ola de reformas neoliberales. Frente a dicha apuesta, con Octubre se reactivó la resistencia de dos bloques populares, aunque confrontados entre sí. El antagonismo entre la RC y organizaciones indígenas remonta al cierre de la Asamblea Nacional Constituyente (2008). Más allá de las diferencias programáticas (extractivismo, Estado plurinacional, etc.), Correa siempre supuso que las políticas de redistribución de la riqueza contienen a aquellas que competen el reconocimiento de la especificidad de los sujetos políticos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, desde 1990, se sentó a negociar con todos los gobiernos de turno, no alcanzó

interlocución con Correa y, constantemente, le demandó *respeto*. Las respuestas de fuerza ante las protestas indígenas hicieron el resto. El correísmo, por su parte, ha criticado la cercanía de organizaciones indígenas al gobierno. Como fuere, la mutua desconfianza política impidió que la emergencia de Octubre consolide acercamientos políticos de envergadura.

La fragmentación del campo plurinacional-popular contrasta, largamente, con la unidad que las élites y la derecha han mostrado en la coyuntura. Aquello se puso a prueba en su sostenido respaldo al gobierno y, aún más, en la inédita configuración de una alianza entre las dos principales tiendas del sector: el Partido Social Cristiano (PSC) y CREO. Jaime Nebot declinó su postulación y dio paso a la tercera candidatura del banquero, supernumerario del Opus Dei y defensor de posiciones ultramercado, Guillermo Lasso. La derecha se presenta así con uno de sus rostros más visibles e ideologizados, aunque con la desventaja de su cercanía a Moreno.

Por su parte, la RC debió batallar tenazmente para no perder registro electoral. El CNE bloqueó, con razones absurdas, hasta dos intentos del movimiento de inscribirse con registro político propio. Finalmente participará con “sigla prestada” (lista 1 de Centro Democrático) y bajo la etiqueta de Unión por la Esperanza

(UNES). El binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall debió superar, a la vez, otros escollos legales y diversas maniobras para impedir o dificultar su inscripción y acción política. Entre otros obstáculos, se prohibió el uso de la imagen de Correa en la propaganda del movimiento, aludiendo que aquel había perdido sus derechos políticos por la condena de la que fue objeto (“caso sobornos”) en septiembre 2020, en una resolución express para impedir su participación como candidato a vicepresidente. Meses antes, la designación del joven economista heterodoxo, Andrés Arauz, había sorprendido a propios y extraños. Su poca visible trayectoria como funcionario público de Correa —un técnico antineoliberal— no lo había implicado en el frente político o en tareas militantes del movimiento. Paradójicamente, el hecho de que fuera un desconocido en política jugó como su mayor fortaleza en una coyuntura en que todas las figuras históricas del correísmo tienen expedientes judiciales en su contra. Arauz estaba fuera del radar anticorreísta y corría pocos riesgos de ser impedido de participar por el breve tiempo entre su postulación y una eventual acusación del régimen. Así, debiendo improvisar por completo en su fisonomía pública (nueva lista, nuevos colores, otras candidaturas, etc.), la RC encendió su menguada máquina electoral. Su campaña orbita en torno a la confianza en la impregnación popular de su identidad política y en la intensidad de su

militancia. A la vez, la evocación de cierto pasado virtuoso (la “década ganada”) y de experiencia gubernativa (“sabemos cómo hacerlo”) quieren contrastar con un presente de mal gobierno. La carencia de autocrítica ya le ha sido imputada en estos años. En todo caso, la demanda de ampliación política —estimulada por el éxito de la fórmula postkirchnerista que encabezó Alberto Fernández en Argentina— no pudo, tampoco, cristalizarse en medio de la atomización del campo popular y de cierta autosuficiencia política, propia de una fuerza que ganó prácticamente toda contienda electoral desde 2006. La fórmula presidencial emerge y se restringe al espacio correísta.

Por su parte, la poderosa exhibición de Octubre 2019 elevó, sorpresivamente, las expectativas con alguna candidatura indígena. Desde fines de 2019, diversas investigaciones confirmaban el encumbramiento de Leónidas Iza (dirigente de Cotopaxi) y/o Jaime Vargas (presidente de la CONAIE) en la carrera a Carondelet (*La Nación*, 2019). Ambos aparecieron en los “días de la cólera” como insignes voces plebeyas que interpelaron vigorosamente a Moreno por la conducción económica y el deterioro democrático. La dirigencia indígena negoció el fin de la protesta sin poner por delante ninguna demanda puramente étnica y reivindicando la defensa de los intereses generales (derogar el Decreto 883). De ahí en más, el movimiento indígena ratificó su

autonomía política frente a la derecha neoliberal y a la RC. Ciertos legisladores de Pachakutik, no obstante, siguieron votando en la Asamblea con el oficialismo. En cualquier caso, en medio de tal coyuntura, la CONAIE convocó al Parlamento de los Pueblos para construir un programa económico alternativo al ajuste: dicho documento se llamó “Minga por la Vida”. Tal proceso lucía como un mecanismo de agregación política para estructurar un plan de gobierno y encausar de forma electoral el impulso de la lucha social. El aterrizaje de la pandemia puso freno a esta y otras iniciativas populares. Si la inacción gubernativa frente a la COVID-19 causó desastrosos efectos en las grandes ciudades, en los territorios indígenas —con servicios públicos más precarios— las consecuencias pudieron ser aún más dolorosas. En un comunicado oficial, la CONAIE (2020) denunció, de hecho, las trágicas consecuencias de la falta de políticas de salud en las comunidades. Entre el vaciamiento estatal y las estrategias biopolíticas de control poblacional quedó entonces bloqueada cualquier acción colectiva ajena a la autogestión de la crisis. La desmovilización general facilitó la renovación del acuerdo gobierno-FMI (septiembre de 2020).

En tal entorno arrancaba el momento de las decisiones electorales al interior de Pachakutik. La proclamación de Yaku Pérez, en ese momento Prefecto del Azuay, generó más de una

controversia. En una inédita dinámica, el “brazo electoral” tomó la delantera a la CONAIE y maniobró en favor de una candidatura que no generaba consenso. La distancia de Pérez con la movilización de Octubre —en campaña no mencionó la revuelta ni rechazó la represión— habría generado más de una suspicacia. Iza y Vargas impugnaron su nominación y llegaron a pedir su anulación (*La Calle*, 2021). A la vez, las habituales lógicas decisionales de CONAIE fueron resquebrajadas en la designación de Pérez. Pachakutik supo imponer su voluntad a la “organización madre” a partir del manejo del reglamento electoral nacional que legisla con base en formatos partidarios estándar. Allí, los miembros del partido tienen más peso que la dirigencia social y la base comunal que nutre al movimiento⁹. En palabras de un investigador afín a ciertas organizaciones:

Ni el Consejo de Gobierno de la CONAIE ni las Asambleas indígenas tenían peso legal alguno ante la autoridad electoral nacional... La dirigencia de Pachakutik contaba a su haber con la ley electoral para respaldar y avalar sus decisiones. Muchos de los dirigentes provinciales que tomaron esa decisión a favor del candidato Yaku Pérez, fueron también tomados en cuenta para encabezar las listas electorales a nivel provincial de Pachakutik. De esta manera, *la organización*

⁹ Dijo Jaime Vargas (CONAIE): “¿Ustedes como dirigentes —se dirigió al auditorio— fueron convocados para escoger a los candidatos? No”, increpó y responsabilizó también de esta situación a la subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velázquez, de no haber acatado las resoluciones de la CONAIE (*El Comercio*, 2021b).

social, CONAIE, fue separada definitivamente de las decisiones de su brazo político (Dávalos, 2021).

Más allá de la pugna interna, Pérez no es una figura improvisada en el mundo indígena. Expresidente de Ecuarrunari —principal organización indígena de la Sierra—, ha destacado como defensor de los derechos de la naturaleza y opositor visible de Correa. En 2019 fue electo como Prefecto del Azuay y ganó más notoriedad. Aunque la revuelta de Octubre reposicionó al conjunto del movimiento indígena en el espacio nacional, Pérez tenía ya cierto recorrido propio. Además de su discurso ecológico, su escepticismo con el Estado y un cierto tono antipolítico enmarcado en evocaciones espirituales, ambos factores contribuyeron para su buen rendimiento en primera vuelta: con 19,39% de los votos, prácticamente los mismos que Lasso (19,74%), estuvo a punto de pasar al

balotaje junto con Andrés Arauz (32,72%).

Así, la polarización entre neoliberalismo y Revolución Ciudadana o entre correísmo y anticorreísmo, que ha organizado la lucha política desde 2007, *parecía entrar en declive*: si en 2017 ambos polos acumularon 83% de los votos (sumado AP, CREO y PSC), en 2021 detentaron 30 puntos menos (Arauz + Lasso). Entre medio, además de Pérez, llegó Xavier Hervas, un desconocido empresario que terció por la Izquierda Democrática (ID), viejo partido cuyos orígenes socialdemócratas son ya insondeables. Su discurso promercado se vio salpimentado con cierta disposición a reconocer las identidades diversas, los derechos de las mujeres y garantías para las minorías. Ambas candidaturas —suman 35% de los votos— trataron siempre de trascender el clivaje en torno a Correa.

TABLA 1. Resultados electorales 2017-2021: presidenciales

	Correísmo	Anticorreísmo		
	Desarrollismo nacional-popular	Ecocomunitarismo intercultural (antiestatal)	Neoliberalismo progresista	Neoliberalismo reaccionario
2017	Moreno (AP): 39%	Moncayo (ID-PK): 6%		Lasso (CREO): 28% Viteri (PSC): 16%
2021	Arauz (RC-UNES): 32,7%	Pérez (PK): 19,3%	Hervas (ID): 15,6%	Lasso (CREO-PSC): 19,7%
	Antineoliberalismo (Polo de Octubre - pueblo)		Neoliberalismo (Bloque del FMI - élites)	

La gran batalla

El desgaste de la susodicha polarización es, de todos modos, relativo. Aunque decrece en relación con 2017 (pierde 6 puntos), la RC ratifica su primacía a nivel nacional —es el bloque parlamentario más extenso— y se coloca como eje gravitacional en la alternativa al dominio neoliberal. Este pierde 24 puntos entre 2017 y 2021 —hace cuatro años PSC y CREO no fueron aliados— y sufre un severo deterioro electoral, asociado a su protagonismo en el gobierno de Moreno. Como fuere, la retórica antiboliviana y anticomunista de Lasso, calcada de su guion de 2017, captura aún a parte del electorado y reproduce también —¿a su pesar?— la centralidad de la polarización en torno al correísmo.

Sobre la base del común rechazo a la RC, Lasso intentó gestionar la crisis política con Yaku Pérez luego de que este denunciara fraude, sin mostrar pruebas, en vista de la escasa diferencia con CREO. Así, apoyó inicialmente el recuento de votos solicitado por Pachakutik para luego entrar en una polémica por el porcentaje de actas a revisarse. El “pacto de caballeros”, como pintó la gran prensa a su diálogo político, finalmente se hizo trizas y Pérez se desmarcó de sostener a Lasso para la segunda vuelta, algo que hizo en 2017 y que le costó críticas por su aparente derechización. La confianza en el CNE, en todo caso, quedó más deteriorada tras este episodio. La gestión de los

comicios de 2021 ha estado repleta de inconsistencias técnicas, errores groseros y discrecionalidad política. Las denuncias en su contra, en particular de la RC, han alertado sobre una eventual resolución “a la boliviana” —gobierno *de facto* de Añez— de cualquier diferendo electoral.

El 11 de abril se reitera, en este clima, la *gran batalla* política que el país vivió en el pasado reciente. Ambos candidatos tienen aún un largo trecho por recorrer para alcanzar la masa de votación que les acerque a la presidencia. Si Lasso logra reimplantar la confluencia anticorreísta —más allá de la unidad ya garantizada de las derechas— tiene un extenso espacio por conquistar. Para Arauz se pone en juego la posibilidad de hacer confluir al “polo antineoliberal de Octubre” aun en medio de la fragmentación del campo popular: aunque Pachakutik ha anunciado un voto “nulo ideológico”, Vargas, presidente de la CONAIE, le ha manifestado su respaldo. Otras organizaciones indígenas y sociales también se han sumado. Más allá de estas fronteras, la “ciudadanía despolarizada” aún espera respuestas puntuales a los grandes problemas para la reproducción de su vida diaria o transita entre la indecisión, todavía importante, y la certeza de su rechazo a ambas tiendas políticas. No es improbable un crecimiento del voto nulo.

Más allá del acertijo electoral, las coordenadas que el Ecuador pueda dibujar desde el próximo 24 de mayo —día de la asunción presidencial— no se atrapan desde el simplificado dilema entre “continuidad neoliberal” y “retorno de la Revolución Ciudadana”. Si bien se trata de dos proyectos de nación, de clase y de construcción política largamente diferenciados, la severidad de la crisis económica, la incierta reconfiguración de la vida social y de los mundos del trabajo en medio de la “normalidad pandémica”, y el propio terreno fracturado de la lucha política (legislativo sin fuerzas mayoritarias, movimiento indígena insuflado, organizaciones feministas creciendo), anticipan una nueva espiral de conflictividad social imposible de ser procesada, *democráticamente*, con repertorios propios del viejo mundo. Aunque aún no lo intuyan, ni el correísmo podrá ser lo que ya fue, ni la derecha volverá a encontrar condiciones de radicalización propias de quien gobierna sin haber sido votado por el pueblo.

Franklin Ramírez Gallegos es sociólogo y profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO-Ecuador. Especialista en temas de movilización colectiva, instituciones políticas y procesos democráticos en los países andinos.

Referencias bibliográficas

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2021): “La economía ecuatoriana creció 4,5% en el tercer trimestre, al comparar con el segundo trimestre de 2020”, Quito. Disponible en: <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1405-la-economia-ecuatoriana-crecio-4-5-en-el-tercer-trimestre-al-comparar-con-el-segundo-trimestre-de-2020>.

CONAIE (2020): *Comunicado ante la grave situación de los indígenas del Ecuador por el COVID-19* (18-06-2020). Disponible en: <https://conaie.org/2020/06/18/covid19/>.

DÁVALOS, P. (2021): “El Movimiento indígena en el laberinto del Minotauro” (24-03-2021). Disponible en: <http://pablo-davalos.blogspot.com/>.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2021): *Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019*, Quito-DPE. Disponible en: <http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2942>.

- DÍAZ, I. y MEJÍA, A. (2020): “Las élites en Octubre: de ciudadanos indignados a propietarios alarmados”, en RAMÍREZ GALLEGOS, F. (coord.) (2020): *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 271-287. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200519040510/Ecuador.pdf>.
- EL COMERCIO (2021): “El presidente Moreno afrontará sus últimos 76 días con un gabinete reestructurado” (9-03-2021). Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/reestructuracion-gabinete-ministros-moreno-gobierno.html>.
- (2021b): “Reclamos entre Presidente de la Conaie y Coordinador de Pachakutik al evaluar elecciones generales” (9-3-2021). Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/dirigentes-conaie-pachakutik-diferencias-elecciones.html>.
- EL UNIVERSO (2017): “Guillermo Lasso le ofrece apoyo legislativo a Lenin Moreno para que llame a consulta popular” (7-09-2017). Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/07/nota/6370303/guillermo-lasso-le-pide-lenin-moreno-que-llame-consulta-popular/?utm_source=fb-tw-gp&utm_medium=social&hootPostID=e5b273b8040c4cbc1cba119c8ba0d794.
- INEC (2020): *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo* (ENEMDU), Quito, INEC. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2020/Diciembre-2020/202012_PobrezayDesigualdad.pdf.
- LA CALLE (2020): “Conaie exige a Pachakutik anular precandidatura de Yaku Pérez” (12-08-2020). Disponible en <https://radiolacalle.com/conaie-exige-a-pachakutik-anular-la-precandidatura-de-yaku-perez/>.
- LA NACIÓN (2019): “Leonidas Iza y Jaime Nebot encabezan la intención de voto presidencial para 2021” (28-12-2019). Disponible en <https://lanacion.com.ec/leonidas-iza-y-jaime-nebot-encabezan-la-intencion-de-voto-presidencial-para-el-2021/>.
- OBSERVATORIO DE LA DOLARIZACIÓN (2018): “Evaluación de

- la Ley Trole 3” (24-05-2018). Disponible en: <https://dolarizacionec.wordpress.com/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3/>.
- OEA (2018): *Informe Preliminar de la Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos en Ecuador* (5-2-2018). Disponible en: <http://www.oas.org/documentos/spa/press/Informe-Preliminar-Mision-Expertos-Ecuador-2018.pdf>.
- RAMÍREZ GALLEGOS, F. *et al.* (2020): “Pandemia y Estado de padecimiento en los Andes”, en BAUTISTA *et al.* (coords.): *Estados Alterados: reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia*, Buenos Aires, IEALC-CLACSO, pp. 353-366. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20210201020811/Estados-alterados.pdf>.
- STOKES, S. (2001): *Mandates and democracy: Neoliberalism by surprise in Latin America*, Cambridge University Press.
- VARELA, M. (2020). “Ley de Apoyo Humanitario: una ley para la precarización laboral y la protección del gran capital” (16-05-2020). Disponible en: <http://informaec.com/2020/05/16/ley-de-apoyo-humanitario-una-ley-para-la-precariacion-laboral-y-proteccion-del-gran-capital-marcelo-varela/>.
- WOLFF, J. (2018): “Ecuador after Correa: the struggle over the “Citizens’ Revolution”, en *Revista de Ciencia Política*, 38 (2), pp. 281-302.

Fundación Carolina, abril 2021

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

https://doi.org/10.33960/AC_13.2021

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)